

## COLOMBIA POR LA PAZ Y A JUSTICIA SOCIAL

### Javier Orozco Peñaranda

Ex dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia

Trece años después del último intento de solución política y con el permiso de los Estados Unidos, el gobierno colombiano ha vuelto a reconocer que el país tiene un conflicto armado interno, y abrió en La Habana una mesa de diálogo y negociación con las FARC-EP para la terminación de la guerra.



El conflicto de medio siglo originado en el uso de la violencia como mecanismo de las élites para acaparar tierras, poder económico y en consecuencia poder político, ha profundizado las inequidad y la exclusión históricas, pero sobre todo ha servido como mecanismo para generar un despoblamiento masivo y violento de los territorios en beneficio de los megaproyectos de inversión en agroindustria, minería y energía para las multinacionales yanquis y europeas.

Parece que el ciclo de violencia para el despojo y la inversión está cumplido y mantener el conflicto como estrategia de reconversión territorial afecta aún más la imagen de la peculiar democracia colombiana, pero sobre todo ya no resultaría funcional a los planes de inversión del sector de la burguesía colombiana ilustrada o menos guerrillera. Sin embargo poderosos sectores económicos y políticos se oponen con fiereza a

la solución política.

Se trata de los viejos latifundistas ociosos que han vivido de las rentas del suelo, y los nuevos teratenientes surgidos de la actividad del narcotráfico. Ambos rechazan la tímida política de restitución de las tierras usurpadas a seis millones de campesinos e indígenas, convertidos en desplazados internos. También se oponen a los diálogos los movimientos políticos de extrema derecha afines al expresidente Alvaro Uribe Vélez y sectores del ejército nacional encabezados por el Ministro de Defensa, quienes aspiran a la impunidad para sus crímenes de lesa humanidad, e intentan sabotear las conversaciones usando un lenguaje que descalifica las negociaciones, y desplegando acciones militares ofensivas en las regiones controladas por las FARC-EP en las que cesaron las acciones militares desde hace dos meses por la orden de la guerrilla de comenzar un cese unilateral e indefinido del fuego.



El Presidente Juan Manuel Santos -exministro de Defensa de Uribe- que recibió un mandato por la paz en las elecciones del 2014, no se decide a abrir

negociaciones con las guerrillas del ELN y del EPL, ni a ordenar a la fuerza pública el cese del fuego y de las hostilidades que reclama tanto la guerrilla como amplios sectores sociales, generando junto con el accionar criminal de los grupos narco-paramilitares una situación de peligro constante para la población civil y para el proceso, justo cuando se afirma desde el ejecutivo que nunca se había llegado tan lejos en unas conversaciones con la insurgencia.

Por su parte el fuerte movimiento social colombiano expresa los anhelos de paz en grandes movilizaciones y en los pocos escenarios de participación abiertos para la llamada sociedad civil. Encabezado por el movimiento campesino, indígena, estudiantil, sindical y popular, se apresta a “ganar en las calles no lo que se acuerde en La Habana”, avisando del agudizamiento del conflicto social como respuesta a la falta de derechos económicos, sociales y culturales en un país que viene creciendo a tasas superiores al 4,5% anual, y al tiempo, sigue siendo uno de los más desiguales del mundo.

Decenas de miles de muertos, desaparecidos, torturados, presos políticos, mujeres y niñas violadas, millones de personas desplazadas y la impunidad estructural han afectado al incipiente estado de derecho, y convertido a la bella Colombia en uno de los países de Nuestra América con el peor panorama en derechos humanos.

Cansada de esa situación Colombia quiere la paz, pero tiene claro que sin justicia social cualquier paz en tierras tan rebeldes resulta endeble.

El escenario de reducción de los enormes gastos en defensa y el deseable incremento de la inversión social, permiten abrigar esperanzas para un pueblo que merece “una segunda oportunidad sobre la tierra”.